

ANTECEDENTES A LA CUESTION MEXICANA

Cuando el 16 de septiembre de 1810 se dió en el pueblo de Dolores el grito por la independenciam, México, o por lo mejor decir la Nueva España, como era llamado el extenso virreinato, apenas conocía las convulsiones políticas. El virrey José Iturrigaray había lanzado dos años antes un proyecto de juntas autónomas que hubiera desembocado sin duda en la independenciam, debido, principalmente, a la convicción muy arraigada —incluso entre los elementos españoles y entre las altas dignidades de la colonia— de que España había de ser vencida por Napoleón. Esta idea favorecía los designios del virrey, a quien se había de acusar incluso de mantener la secreta ambición de proclamarse emperador. Los elementos españoles reaccionaron oportunamente ante el peligro y la conjura fracasó: Iturrigaray fué depuesto por un golpe de fuerza muy semejante a los que había de padecer la Península y se le deportó a España; los españoles respiraron de nuevo y los mexicanos disimularon su contrariedad. Pero de aquel movimiento quedaba una idea política y un concepto nuevo de dependenciam: México obedecería a su rey, al rey de las Españas, a Fernando VII, pero no al pueblo español representado en las juntas de gobierno creadas en la Península al quebrarse, por renunciam del monarca, la autoridad del trono. El pretexto era oportuno: Fernando VII prisionero en Francia no podía opinar y, mientras se mantuviera su cautiverio —que los patriotas deseaban *sine die*— los mexicanos podían ser

dueños de sus propios destinos. Esta fué, en síntesis, la idea, o por mejor decir el pretexto que enarboló como bandera el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la revolución que había de desembocar, once años más tarde, en la independencia.

A nombre de Fernando VII, cautivo en Valençay, se inició la contienda; sin embargo a ninguno de los dirigentes les interesaba el rey, ni la monarquía, ni la dependencia del virreinato a la corona; al fin y al cabo los partidarios y los más fieles súbditos del monarca eran los "gachupines", para los cuales se lanzaban, antes de las descargas de los fusiles, los "muertas" de una multitud que se sentía al fin libre de la opresión española y sobre todo de la tiranía de los hacendados, burócratas y altas dignidades del virreinato.

Hidalgo, con los demás jefes de la revolución, caía en Chihuahua cuando aun no se cumplía un año de la iniciación de la lucha. Le habían perseguido, no sólo las armas españolas, sino las de la Fe con edictos de excomunión y augurios de condena eterna para los que siguieran al viejo capellán que supo escudarse, a su vez, con el estandarte del sentimiento religioso del pueblo, con el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Su muerte no sirvió de escarmiento, ni su cabeza, expuesta en las paredes de la Alhóndiga de Granaditas (Guanajuato), impuso silencio; los mexicanos siguieron la lucha con Ignacio López Rayón primero, con el cura José María Morelos después, con Vicente Guerrero más tarde. ¿Dónde estaba ya la supuesta fidelidad monárquica fernandina? Había caído en el olvido más absoluto. El pretexto se había ahogado en la sangre de tantos patriotas sacrificados en una guerra sin cuartel y sin leyes, guerra de instinto, primitiva y despiadada. Había caído el mito: los "americanos" —como les era grato llamarse los mexicanos de entonces— luchaban por la independencia al margen de la realeza o de un

buen o mal gobierno español. Años más tarde (1817) llegaba a la Nueva España, a fin de desvanecer el mito de Fernando VII, Javier Mina, navarro de nacimiento, impelido por ansias nuevas de liberalismo. Sus proclamas contra el rey —entregado por aquel entonces en brazos de la camarilla más absurda que ha influido en los destinos de España— dieron fin a la mentira. El entusiasmo que despertó Mina entre los insurgentes, agotados y maltrechos en aquel momento, demuestra, no ya la indiferencia, sino el odio que los patriotas sentían por Fernando VII, a pesar de haber sido su nombre la bandera de su rebeldía, con Hidalgo primero y con la Junta de Zitácuaro —esbozo inicial de gobierno independiente—, después (1811). La presidía Ignacio López Rayón, capacitado y consciente éste de la magnitud del problema que la lucha planteaba.

Desde 1815, o sea después de la muerte de José María Morelos, caudillo que supo vencer y morir, la revolución va perdiendo bríos y figuras. En 1817 el virrey Juan Ruiz de Apodaca cuenta con un ejército infinitamente superior al de los insurgentes que en zonas diversas del país, sin disciplina, obedeciendo a un instinto guerrero, se opone a la dominación con soldados heroicos que saben ir a la muerte pero no a la victoria. La insurgencia, a excepción del episodio brillante, y casi de leyenda, de Javier Mina, ya no es problema para Juan Ruiz de Apodaca, que para calmar las ansias separatistas de los mexicanos, ha usado unas veces del patíbulo y otras del indulto ofrecido con irregulares garantías a los que persisten en su lucha contra el poder español, afianzado en amplias zonas de la Nueva España.

Había sido una guerra inhumana la que se había sostenido durante el virreinato de Félix María Calleja y la que había iniciado el silencio. Un silencio con el que se engañaron los españoles de la colonia, las altas digni-

dades de la Iglesia, los mismos oficiales del ejército y el propio virrey, quizás demasiado orgulloso de su obra, porque los espíritus seguían en rebeldía y la fe en la emancipación anidaba en el pecho de todos los hombres ilustrados que en los pequeños corrillos de las ciudades, en las famosas tertulias ochocentistas, diseminaban las ideas de independencia. Era indiferente que los insurgentes lucharan los unos contra los otros, que algunas de las figuras más destacadas de la rebeldía se acogieran al indulto y que tan sólo algún hombre como Vicente Guerrero mantuviera las armas en alto: el desenlace estaba próximo, por caminos insospechados y, como en el primer período de la contienda, el motivo había de encontrarse en los acontecimientos políticos de España, de una España que se ensangrentaba y desfallecía en sus luchas internas. Después de diez años de guerra sin cuartel, al conocerse en México el triunfo del constitucionalismo español (1820), los absolutistas, o sea los que defendieron hasta entonces la dependencia a la corona, alzaron su bandera de rebeldía. ¿Qué sentido tenía el estandarte en manos de los antiguos realistas? Era claro que preferían la separación al liberalismo y que el grito de libertad era odio a los principios que iban a implantarse en Nueva España con el triunfo de la Constitución y, con ella, el de la insurgencia de Hidalgo, de los López Rayón, de Morelos y de tantos patriotas, caídos unos, amnistiados otros, olvidados los más. Baste saber que el movimiento nació en torno de un acérrimo realista, el doctor Matías Monteagudo, clérigo influyente e iracundo, anatemizador de los insurgentes, a quienes quería mandar al cielo después de fusilarlos.

Antes que la Constitución, la independencia; antes que la libertad española, la propia tiranía. Así puede resumirse el pensamiento de aquellos hombres que, obsesionados por la cuestión religiosa, envenenados por las

doctrinas absolutistas, dieron fin a la historia de la Nueva España.

El brazo ejecutor no hay que buscarlo, claro está, entre los insurgentes históricos, sino en un antiguo oficial realista que sabe de todas las torturas infringidas a los patriotas, que ha combatido a los rebeldes con saña y odio, que tiene fama de audaz y de ambicioso y cuyo nombre no puede inspirar recelo alguno: Agustín de Iturbide.

Cuando el virrey le confía las fuerzas que han de salir de la capital para dominar al invencible Guerrero, Iturbide ya tiene todos los cabos de la trama; no han de pasar muchos días sin que el virrey se entere que Iturbide ha abrazado a Guerrero en Acatempam (simbólico antecedente al abrazo de Vergara en España), ha vitoreado la independencia y ha unido su ejército numeroso al de los patriotas que han resistido once años. Así, después de un manifiesto lanzado en Iguala y basado en las garantías de "religión", "unión" e "independencia", la bandera tricolor, simbolizando en cada franja uno de estos ideales, recorre en pocos meses las ciudades de la colonia. Los militares, hasta entonces fieles al virrey, se juntan a las filas de Iturbide, y los antiguos insurgentes, ingenuos incorregibles, ven en la empresa tan sólo el ideal de libertad y ayudan con entusiasmo. Una vez más han dado muestras de una abnegación heroica. Por encima del odio a sus antiguos tiranos, instrumentos del terror español, han sabido colocar su fe patriótica, maltratada y herida hasta hace muy poco tiempo por los que ahora les han robado el grito de "Viva la independencia".

Casi sin sangre, sin resistencia, el ejército de Iturbide, victorioso en todas partes, entra al fin en la antigua capital del virreinato (27 de septiembre de 1821) entre aclamaciones y esperanzas. Se mira al antiguo soldado realista como a un ser providencial: "La nación mexicana

—reza un curioso párrafo del Acta de Independencia del Imperio—, que por trescientos años ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa eternamente memorable que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos casi insuperables". No obstante, lo que inauguraba el genio superior a toda admiración y elogio era un período de poder personal, en el que la tiranía y los procedimientos de terror habían de ahogar tantas buenas intenciones.

El soldado no resultó al fin otra cosa que un desaprensivo, ambicioso de gloria, que llegó hasta el delirio de proclamarse emperador de México con el nombre de Agustín I. Su Plan de Iguala, por el que se ofrecía la corona del nuevo imperio a Fernando VII o a un infante de España, quedaba definitivamente destruido, aunque en verdad el designio de Iturbide había sido ya desde el primer momento llegar él a alcanzar el cetro que ofrecía a los Borbones. Por ingenuo que fuera —e Iturbide era todo menos ingenuo— nunca podía pensar en que sus proposiciones fueran aceptadas por España y menos por el rey, incómodo con sus trabas constitucionales y dispuesto siempre a reconquistar su imperio. Así fué como este soldado, siguiendo los pasos de Napoleón, a quien tenía siempre muy presente en proclamas, actitudes y gestos teatrales, inauguraba en 1822 su dinastía en México, dinastía que no había de arraigar ni en su misma persona. Destronado primero, fué fusilado más tarde cuando, desde Inglaterra —y sin duda sugestionado nuevamente por el éxito de Bonaparte al regresar de la isla de Elba—, pisó otra vez el suelo mexicano en pos de sus pretendidos y fantásticos derechos.

Como era de esperar, España recibió muy mal la independencia de México y los Tratados de Córdoba (ratificación del Plan de Iguala) celebrados entre Iturbide y el nuevo virrey Juan O'Donojú que con el título de jefe político, como designaba la Constitución restablecida, había llegado a la Nueva España en el momento en que todo el país —o por mejor decir, lo que contaba entonces en el país: clero, ejército, altas dignidades, hacendados y los mismos españoles absolutistas— estaba con Iturbide¹.

En los Tratados de Córdoba había una aparente insignificante variación del Plan de Iguala, que era en realidad importantísima para que Iturbide pudiera proclamarse emperador: serían llamados al trono de México Fernando VII o sus hermanos don Carlos y don Francisco de Paula, omitiendo el nombre del archiduque Carlos de Austria. Además, ante la perspectiva de que se negasen los Borbones, las Cortes del Imperio quedaban facultadas para designar al hombre que había de coronarse emperador de México, el cual —otra precisión importante y elocuente— no era necesario que perteneciera a una de las casas reinantes en Europa. El juego era ya tan claro que en el mismo día de la entrada del ejército independiente en la capital poco faltó para que sus soldados proclamasen a Iturbide, adelantándose a los sucesos, emperador de México.

A pesar de la hostilidad de España, claramente manifestada por las Cortes al declarar nulo lo tratado entre O'Donojú e Iturbide, los diputados americanos querían conocer el pensamiento de la casa real. Fernan-

¹ Desde España la actitud de Juan O'Donojú se vió como la de un traidor. Ignoraban que en 1820 toda la gente culta de Nueva España era partidaria de la independencia. Este error subsistirá tanto tiempo que en 1842, ya iniciadas las relaciones diplomáticas entre España y México, el ministro Pedro Pascual de Oliver, en un despacho al ministro de Estado, afirmará que a O'Donojú se debía única y exclusivamente la independencia de México. (Documento existente en el Archivo de la Embajada de España en México).

do VII, indignado, inquieto y con ansias de aprovechar cualquier oportunidad que le librara de las Cortes, a las que achacaba todos los males peninsulares y de ultramar, no quiso ni tan sólo tomar en cuenta la proposición; la despreció simplemente. Sus hermanos, don Carlos y don Francisco de Paula, sí prestaron oídos a la tentadora oferta, y según don Lucas Alamán, "disputaban entre sí"¹. Don Carlos, no obstante, no había de abandonar sus pretensiones a la corona española por la de un imperio naciente y don Francisco, a quien ya algunos diputados americanos besaban la mano dándole el título de Majestad, recibía la más severa reprimenda del rey y la prohibición de entrevistarse con los representantes de México en Cortes, prohibición justificada cuando se conoce que había sido descubierto, y comunicado a Fernando VII, un plan de evasión de Madrid y el traslado del infante a Lisboa, desde donde había de embarcarse para México.

Años más tarde (1827) el proyecto era de nuevo patrocinado por el ministro de Hacienda de Francia, Villèle, a sugerencia del marqués de Crouy, aventurero audaz, que había estado primero al servicio de Napoleón y después de Luis XVIII, sujeto desaprensivo y para quien las guerras intestinas de España habían significado pingües beneficios. Villèle le comisionó, cerca de la corte española a fin de obtener de Fernando VII el consentimiento para que su hermano, Francisco de Paula, aceptase la corona del imperio mexicano. El rey, ya nuevamente absoluto, pues la Constitución había caído ante las armas del ejército francés con los Cien Mil Hijos de San Luis al mando del duque de Angulema (1823), negóse a intervenir en cualquier proyecto que no tuviera como fin la reincorporación de las antiguas colonias a su soberanía y para lo cual había pedido ayuda a la Santa Alianza.

¹ *Historia de México*. Editorial J.U.S. México, 1942. Vol. V, pág. 518.

Fracasada la primera gestión, Villèle, siempre valiéndose del marqués de Crouy, se dirigió directamente al infante, quien convino salir de España a pesar de la oposición del rey y trasladarse a México. Dió, además, amplios poderes al marqués de Crouy y la autorización para que en su nombre se negociara en Londres un préstamo de cinco millones de pesos.

El rey de Francia, Carlos X, no quiso interesarse por un proyecto que sabía enojoso para Fernando VII, lo cual no fué obstáculo para que altos personajes de la corte francesa ayudaran a Crouy y aceptaran empleos ofrecidos por el marqués en virtud de los poderes a él conferidos por el infante Francisco de Paula. Resulta curioso y desconcertante ver que Alejandro de Talleyrand, consejero de Estado, se le designara ministro de Relaciones Exteriores, que al duque de Dino se le reservara el ministerio de la Guerra, y que al conde de Roche-Aymon se le confiara la delicada misión de organizar el ejército. ¿No era aquello un deseo de intervención, prescindiendo de los mexicanos e incluso de los mismos españoles borbonistas de México? Afortunadamente el proyecto fracasó al solicitarse la ayuda económica de Inglaterra: Canning ni siquiera quiso recibir al marqués de Crouy que se había trasladado a Londres para negociar el empréstito.

Otro pretendiente a la corona de México fué el conde de Moctezuma, Alfonso Marcilla de Teruel, que de Madrid trasladóse a París a fin de intrigar para que se le reconocieran sus derechos al trono, descendiente como era, por vía transversal, de uno de los últimos emperadores mexicanos. El intento cayó en el ridículo, pero es ya lo bastante elocuente en sí mismo para apreciar la ambición desbordada de algunos personajes. Entre ellos no hay que olvidar, aunque resultara sólo una simple insinuación escrita, la de Fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, dominico, inquieto defensor de los sagrados dere-

chos de México a la independencia, enemigo irreconciliable de Iturbide cuando éste se proclamó emperador, y republicano incluso, pero que por su carácter ególatra no se hubiera negado a aceptar, con todo y sus hábitos religiosos, la corona del naciente imperio¹.

No obstante, eran los mismos mexicanos los que en aquel momento iban buscando, como asustados de su propia obra, un rey que quisiera ayudarlos en su caminar por la senda nueva: en 1821 una comisión mexicana se trasladaba a Viena para rogar al archiduque Carlos —a pesar de no figurar su nombre en los Tratados de Córdoba— que aceptase la corona. El archiduque, fino observador, agradecía la atención pero renunciaba a la deferencia. Demostraba —si es que el consejo no fué de Metternich— una visión mucho más clara que la que había de tener años más tarde Maximiliano de Habsburgo.

Todo ello constituye valiosísimo antecedente de las intrigas futuras para llevar un emperador a México. Las disparatadas pretensiones de entonces explican quizás sorprendentes designios atribuidos, sin fundada razón —ya hablaremos de ello— a Juan Prim y Prats.

“El Imperio, a pesar de su popularidad —ha escrito Justo Sierra—, nació muerto”². Muerto y ridículo, añadiríamos nosotros al contemplar la fastuosidad advenediza de los nobles, impuestos por la necesidad de una corte que resultó grotesca caricatura de las de Europa. El país

¹ “Ya que se quisiese el imperio mexicano, sería una injusticia ir a buscar emperador en las dinastías de Europa que no tienen más derecho en América que los de los ladrones y salteadores, y nos traerían las intrigas de la Europa y sus familias, cuando en México hay descendientes de las 30 familias reales que componían el imperio mexicano, y yo soy uno”. Escritos inéditos de *Fray Servando Teresa de Mier*. Introducción, notas de ordenación de textos por J. M. MIGUEL I VERGÉS y Hugo Díaz-THOMÉ. México. El Colegio de México, 1944.

² *Evolución Política del Pueblo mexicano*. La Casa de España en México, 1940, pág. 197.

era algo más que todo aquel aparato externo que no supo ni pudo resistir el más leve impulso de oposición.

En 1823 caía el Imperio y se proclamaba la república que no resultó ser solución ninguna. México había de batirse por muchos años, a pesar de la buena voluntad de sus gobernantes —virtud de la que no hay que excluir ni al mismo Iturbide—, en luchas internas, conspiraciones y pronunciamientos de la más pura raigambre española.

España observaba el desbarajuste con disimulada satisfacción. Para disimularla, formulaba protestas por el trato que recibieron los españoles, primero a insinuación de Lorenzo de Zavala, en el mismo período del imperio de Iturbide, y después durante las presidencias de Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, cuando las amenazas llegaron a tomar la expresión de una orden: el Congreso decretó la expulsión de los españoles del país, y ello provocó un éxodo de familias desamparadas que, entre gritos de “mueran los gachupines”, caminaban hacia las costas en busca del refugio de un buque que les salvara de un odio fomentado desde el gobierno y también desde las altas esferas españolas, que estaban más interesadas en la política que en los bienes y vidas de los súbditos radicados en la antigua Nueva España. No es difícil pensar que en su pensamiento íntimo Fernando VII creía que cuantos más atropellos se realizaran contra sus vasallos mejor podría interesar a la Santa Alianza en sus ansias de reconquista, ansias expresadas al último virrey de México, Juan Ruiz de Apodaca, cuando éste le acompañaba de Sevilla a Madrid después de la victoria de las armas francesas que le reinstauraban rey neto y absoluto. De provocación para conseguir ese propósito puede calificarse el bombardeo de la indefensa plaza de Veracruz por las fuerzas españolas que ocupaban el castillo de San Juan de Ulúa, cuando se supo en la fortaleza que el rey escoltado por las fuerzas del duque de Angulema, había

entrado en Madrid y anulado de un plumazo la famosa Constitución de Cádiz.

Hay que tener muy presente esto para apreciar en su justo valor los pretextos de España para intervenir en México. En realidad, poco le interesaba al gobierno la vida de sus súbditos, pero sí seguía con atención los acontecimientos y tomaba buena nota de todas las arbitrariedades y humillaciones a que se sometía a los españoles para presentarlas al mundo y justificar, envolviéndolo en motivos sentimentales, su proceder. Así se explica la desafortunada expedición (1829) sobre las costas de Nueva España que dirigió el brigadier español Isidoro Barradas, sujeto de escaso mérito militar, cosa que, por lo visto, no fué obstáculo para que España le confiara la temeraria empresa —tan fácil se creía— de reconquistar el antiguo virreinato.

Barradas, con un ejército de cinco mil hombres, desembarcó en Tampico; la expedición, formada en La Habana —centro en aquel entonces y por muchos años de las intrigas españolas en América—, fué derrotada por las fuerzas mexicanas que habían acudido a hacerle frente al mando de los generales Santa Anna y Mier y Terán. El pueblo español, más clarividente que el gobierno y más sensato que Fernando VII, siempre con el delirio de recobrar su imperio, juzgó aquella aventura descabellada como una insensatez; no en vano circuló entonces por la Península el dicho de que "las esperanzas de España están embarradas", ironía que alcanzaba por igual a los soñadores de empresas irrealizables y al pobre brigadier escogido para la empresa.

Es también de aquellos tiempos la idea sostenida por la diplomacia europea de establecer en América monarquías independientes, en las que habían de figurar, naturalmente, individuos de las casas reinantes en el viejo continente. Como si el proyecto fuera realizable sin contar

con el beneplácito de las nuevas organizaciones políticas que habían nacido de la lucha y el dolor, Chateaubriand, alma de esta absurda idea, se perdía en proyectos tan fantásticos como eran, por ejemplo, los de llegar a precisar nombres de príncipes favorecidos. Nadie, por lo visto, tenía en cuenta que Iturbide había sido fusilado y que San Martín fracasaba en un plan semejante al de Iguala, patrocinado por él en el Perú, y que al fin, vencido en la egolatría que le indujo también a hacerse proclamar emperador, abandonaba para siempre el país que había contribuido a liberar. Las antiguas repúblicas del Plata veían estropearse un intento monárquico a base de príncipes españoles, y respecto al Brasil, único país de América que contaba con una testa coronada, cualquier buen observador —y no lo era la diplomacia europea— hubiera podido predecir fácilmente el derrumbe del sistema.

Otro acontecimiento importante que hubiera influido en los políticos españoles si éstos no hubiesen sido, más que consejeros de la corona, aduladores del monarca, fué el reconocimiento por parte de los Estados Unidos de las nuevas Repúblicas americanas, precisamente cuando las Cortes de Madrid denunciaban los Tratados de Córdoba. Un aspecto interesantísimo del hecho, advertencia a España y a las intrigas monárquicas europeas, fué que no se incluyera en este reconocimiento a México, que estaba entonces (8 de marzo de 1822) bajo el cetro del emperador Iturbide. Resultaba claro —y la política posterior norteamericana lo confirmó plenamente— que no sólo no era grata en Wáshington la institución monárquica, sino que el gobierno norteamericano no toleraría intromisiones europeas en la antigua América española so pretexto de imponer príncipes europeos. Para que no se abrigara ninguna duda al respecto, el presidente Monroe declaraba un año más tarde (diciembre de 1823) "que era imposible que las potencias europeas extendiesen su sistema político

sobre ningún punto de América, sin turbar la dicha y la paz del Continente, y que, por lo tanto, era imposible que los Estados Unidos los viesan obrar con indiferencia”.

Inglaterra, que ya cuando la guerra por la independencia de los territorios americanos había favorecido los propósitos de algunos patriotas, se negaba a asistir ahora a la conferencia de París expresamente convocada para tratar de la sublevación de las colonias (1825). Al mismo tiempo mandaba a Fernando VII el texto de una resolución, comunicado también a los gobiernos de Francia, Austria y Rusia, en el cual consideraba inútil cualquier reunión que no tuviera como base el reconocimiento de la independencia de los pueblos de América. Casi simultáneamente (julio de 1824) unos cónsules con poderes para negociar tratados de comercio salían de la Gran Bretaña con destino a Buenos Aires, Chile, Colombia y México. La Santa Alianza se tambaleaba y moría, en relación a América, cuando Canning, presidente del gobierno inglés, comunicaba a los embajadores extranjeros que la Gran Bretaña había resuelto “el reconocimiento de las antiguas colonias como Estados independientes”. El golpe había sido certero, porque España y Francia conocieron la resolución británica (1825) en el preciso momento en que habían concertado una acción militar sobre América.

Desvanecidas las esperanzas de una ayuda europea, el recurso a que apeló Fernando VII consistió en una nota detallada de protesta. Ello no equivalía, de ninguna manera, a una renunciación, porque el rey pensaba estar constantemente atento a los sucesos políticos de América y aprovechar cualquier coyuntura que juzgase favorable para intentar de nuevo la reconquista de sus dominios. La expedición de Barradas resultaba al fin y al cabo una manifestación de inconformismo y un alerta a los países americanos que veían en los restos del gran imperio que

quedaban en manos de España un trampolín para posibles acciones de guerra: España retenía San Juan de Ulúa, en México; el Callao, en el Perú, y la isla de Chiloé, en Chile, como una esperanza.

Y la esperanza no se desvanecerá con la pérdida de estas posesiones ni con la muerte de Fernando VII. En los gobiernos de María Cristina y en los de Isabel II ha de persistir, a pesar del reconocimiento de la independencia de México (1836), un secreto anhelo de reconquista que equivale casi a una venganza.

En 1846 se piensa nuevamente en imponer un rey a México; se piensa y se actúa para ello. Bermúdez de Castro se traslada a la antigua colonia con amplios poderes del gobierno de Narváez para facilitar la intentona. En lo que se fracasa es en la designación del candidato, pues mientras Narváez señala al infante don Enrique, hermano del rey Francisco, María Cristina quiere imponer a un hijo suyo y de Fernando Muñoz. Hay que buscar en esta discordia la causa principal de la caída de Narváez durante el primer período de su gobierno y el desvanecimiento del sueño imperial.

Años más tarde (1859) se firma un convenio secreto entre el embajador español Mon y el ministro mexicano Almonte para establecer la monarquía en la persona del infante don Sebastián, del conde de Montemolín o de su hermano don Juan. Esta vez la conjura fracasa por el proceder de Francia que tiene ya vagos proyectos sobre México y que ha escuchado las voces de sirena de José Hidalgo, mexicano intrigante.

Hidalgo ha puesto de manifiesto ante la emperatriz las grandes ventajas que a Francia reportaría el patrocinar por su cuenta un gobierno monárquico en una República que se arruina y agoniza entre sus luchas civiles.

Todo ello explicará la rara satisfacción española por las dificultades en que se debaten las antiguas colonias emancipadas, las intervenciones armadas y el entusiasmo con que se ve la designación de Prim para acaudillar unas tropas que han de desembarcar en México en pos de unas reparaciones. Muchos piensan —así es de impresionable el carácter español— que el héroe de Castillejos va a realizar el milagro de reintegrar a la Península el fabuloso y añorado tesoro que representa la Nueva España.

No era solamente México el punto de mira del gobierno español; lo era asimismo Venezuela, en donde (1860), con el pretexto de recibir satisfacción por unos asesinatos de españoles, el representante del gobierno de Isabel II declaraba rotas las relaciones diplomáticas y partía de Caracas precisamente en el momento en que la República se encontraba empeñada en una guerra interior y, claro está, con la amenaza de una intervención española.

Todas estas tentativas culminaron en un éxito aparente: la anexión de Santo Domingo a España (1861), patrocinada por el general Santana¹. La lucha interna que en aquel momento sostenían los Estados Unidos, favoreció el intento; esta contienda explicará asimismo la actitud de O'Donnell para con México y Venezuela.

La protesta iniciada por el presidente de Haití, Geffrard, fué inmediatamente secundada por el Perú al mandar a todos los gobiernos de América un proyecto de alianza continental con el fin de oponerse a las ambiciones de dominio. Perú debió acertar en las intenciones de España que denunciaba, ya que hay que buscar en su

¹ No tiene que ver, naturalmente, con el general Santa Anna, mexicano. Se llamaba Pedro Santana y siendo presidente de la República preparó la incorporación de que se habla. Se le nombró entonces capitán general y se le otorgó el título de marqués de las Carreras. (1801-1815.)

proceder la causa principal del rompimiento con el gobierno de Isabel II. El éxito, como ya se ha dicho, no fué más que aparente: las tropas españolas abandonaron al fin Santo Domingo (1865) con una pérdida para España de cien millones de pesetas y, lo que es peor, de dieciséis mil vidas. El sueño imperial de la reconquista de América se había desvanecido totalmente.